

REDUCCIÓN DE ESPACIOS CÍVICOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LA PANDEMIA DEL COVID-19 COMO ACELERADOR DE RIESGO

Andrei Serbin Pont - Constanza Boettger

CONTEXTO

La crisis del COVID-19 ha sacudido a la comunidad internacional por su velocidad y alcance desde su origen, pero no ha implicado una alteración, sino una aceleración de las tendencias geopolíticas globales preexistentes siendo la reducción de espacios cívicos una de ellas. En América Latina y el Caribe, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en prevención de conflictos, resiliencia, construcción de paz y derechos humanos se enfrentaban a un triple desafío en materia de espacios cívicos. Dos de esos desafíos están atados a mecanismos, decisiones y situaciones externas que condicionan su proceder y un tercer aspecto refiere a sus propias limitaciones operativas. Cuando la pandemia del COVID-19 hizo su arribo a América Latina y el Caribe, la región se enfrentaba a su propio proceso de transición articulado por el surgimiento de un nuevo orden internacional, así como cambios en el mapa político y económico regional. La situación actual gestó condiciones para que las élites gobernantes expandan su panoplia de herramientas para enfrentar la pandemia pero que a la vez corren el riesgo de ser instrumentalizadas para avanzar sobre agendas preexistentes a la pandemia contribuyendo a la corrosión y contracción del espacio cívico regional. El primer desafío externo al que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil lo constituyen las herramientas de control social, los mecanismos represivos, la expansión de los poderes ejecutivos, la censura y las acciones estatales desmedidas que a su vez, se han convertido en respuestas recurrentes al COVID-19. De acuerdo con el Monitor de Seguimiento del espacio cívico de CIVICUS (2020), los datos para la América Latina y el Caribe muestran que el espacio cívico se reduce en 22 de 32 países; siendo obstruido y cerrado en 8 de ellos. En términos demográficos, esto significa que más de la mitad de la población del continente vive en países con un espacio cívico bloqueado (32%) o represivo (25%). El 45% restante vive en países donde el espacio cívico se ha reducido durante los últimos años.

Los casos más evidentes se han presentado en México, Brasil y Venezuela. El desprecio por los riesgos que acarrea el virus se convirtió en la norma y luego fue sustituido por una respuesta estatal insuficiente y/o una utilización política de la pandemia para reforzar las estructuras estatales represivas con propósitos que superaban las necesidades mismas de la respuesta a la pandemia y respondían a intereses políticos de la dirigencia gubernamental (HRW, 2020).

El segundo desafío que encuentra la sociedad civil regional para seguir avanzando en la creación y consolidación de espacios es de carácter interno. La promoción de agendas propias, independientes de las impuestas por los gobiernos o por las organizaciones intergubernamentales a nivel regional se ve obstruida en muchos casos por sus propias limitaciones operativas. Las mencionadas limitaciones operativas, van no sólo desde el establecimiento de agendas sino en cuanto a la ejecución de programas, su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, la adaptación a cambios externos, la disponibilidad de personal comprometido para dar seguimiento y reporte a las necesidades de los donantes y la ausencia de trabajo conjunto y coordinación entre organizaciones que trabajan los mismos temas, que se debe en muchos casos al desconocimiento sobre los desarrollos hechos por otras organizaciones, como en muchas ocasiones a la competencia por recursos escasos. Este último punto refuerza la posición de vulnerabilidad de las organizaciones de la sociedad civil (en adelante OSC) para establecer agendas de discusión y permitir su desarrollo y ejecución exitosa.

Actualmente, y como se ha observado previamente, las condiciones para una participación ciudadana efectiva no han sido facilitadas a nivel nacional. Como ha sido señalado, el espacio cívico tiende a ser reprimido u obstruido en muchos de los países de la región, en el marco de la adopción de legislaciones que prohíben y reprimen a las OSC, violando los derechos de los ciudadanos a organizarse, manifestarse y movilizarse. Frente al riesgo inminente de conflicto, violencia e inestabilidad, las OSC desempeñan un papel clave en la construcción de resiliencia, el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo y la formulación de recomendaciones de políticas para contrarrestar estos riesgos y contribuir a una situación más estable y pacífica, así como un futuro más inclusivo.

Uno de los ejemplos más claros de la situación actual es la agudización de la crisis humanitaria en Venezuela que es la mayor crisis de refugiados en la historia latinoamericana. Al momento de escribir este brief, 5.093.987 venezolanos (ACNUR) ya ha abandonado su tierra natal. Durante la última década, el espacio cívico en Venezuela ha sido reprimido. Allí, los miembros de la sociedad civil que critican a los gobernantes corren el riesgo de ser vigilados, hostigados, intimidados, encarcelados, heridos y muertos, como resultado de acciones de actores estatales y/o no estatales, incluidas organizaciones criminales ilegales, cárteles de la droga y grupos armados progubernamentales. La pandemia del COVID-19 ha fortalecido este accionar represivo al instrumentalizarse la crisis sanitaria como herramienta legitimadora de despliegues militares para el control social, ampliación de las acciones estatales violatorias de derechos como la propiedad privada, y la limitación de la circulación para reducir las posibilidades de movilizaciones populares en protesta a las medidas del gobierno.

Ningún país de nuestra región ha escapado al impacto de esta crisis. Los estados de América Latina y el Caribe siempre han tenido capacidades reducidas para dar una respuesta eficaz a las crisis. Debido a la fragilidad de sus instituciones, estas capacidades se han retrotraído aún más frente a la situación actual, tal como se observará en el caso de El Salvador a partir del brief de Celia Medrano. Las brechas en los sistemas de salud fueron la principal preocupación para muchos. Sin embargo, el tema de la crisis económica pendiente junto con la inestabilidad socioeconómica se convirtió rápidamente en un tema central en el debate.

En septiembre de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la reducción del espacio cívico y democrático en Brasil, caracterizada por ataques a defensores de los derechos humanos y restricciones al trabajo de la sociedad civil. El documento escrito por Gilberto Rodrigues lo ilustra a partir del abordaje del Decreto 9759 promulgado por el gobierno de Bolsonaro que reduce los consejos federales con participación de la sociedad civil de 700 a 50, lo que no sólo retira la voz a la sociedad civil como formuladora de políticas públicas, sino que debilita la proyección de causas transversales a la política regional e internacional, obligándolas a trabajar no sólo en condiciones de fragilidad sino de manera individual, unilateral, y muchas veces unidireccional.

Como se señaló anteriormente, la crisis humanitaria en Venezuela no es el único ejemplo de la situación actual en la región, también ha habido turbulencias recientes en otras partes de la región. La “ola de manifestaciones” del 2019 en Bolivia, Colombia, Chile, el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), Paraguay y Perú, son reflejo de las crisis institucionales, económicas, políticas y sociales, que el 2020 sólo ha podido eludir bajo cuarentena y confinamiento. La olla a presión del 2019, puesta en pausa en 2020 puede devenir en un 2021 aún más complejo para toda la región, los hechos recientes en Perú reafirman una inminente inestabilidad pospandémica de las instituciones democráticas ya deterioradas, donde la protección de las poblaciones vulnerables requerirá ineludiblemente acciones conjuntas para brindar respuestas multidimensionales de la crisis actual.

¿Se normalizarán estas acciones que tienen un impacto directo en las OSC de todo el mundo, pero particularmente en el Sur Global, y se seguirán empleando en el mundo posterior a COVID19? No podemos responder eso con certeza, pero resulta imperioso generar mecanismos no sólo de alerta temprana, sino de respuesta temprana para el futuro próximo y los desafíos que nos presentará. La sociedad civil tiene un papel clave que jugar, no se puede dejar de lado, especialmente en situaciones de discursos políticos polarizados o inminentes crisis económicas, como aquellas que se prevé se agraven durante el 2021. Allí la sociedad civil no solo debe llenar los vacíos que deja el Estado, o en algunos casos incluso compensar la ausencia del Estado, sino generar las condiciones necesarias para futuras instancias de diálogo y negociación que serán de suma importancia. Las mesas de diálogo en el caso de Nicaragua han sido fundamentales, aun cuando actualmente se encuentren suspendidas, y en instancias de reconstrucción de la matriz social urge su reactivación. Hay casos en los que la sociedad civil puede canalizar la voluntad de ciertos actores para comunicarse, dialogar y negociar y ofreciendo alternativas al uso de la violencia como herramienta política. Legislaciones represivas, no hacen más que reducir estos espacios lo que se pueden ver claramente en los briefs de Marlin Sierra y Elienai Gonzalez. La crisis del COVID-19 interpela a la sociedad civil a actuar rápidamente, incluso cuando la actuación se lleve adelante desde nuestras casas.

Un tercer desafío de carácter externo que afecta la operatividad de organizaciones de la sociedad civil es de carácter financiero. En el contexto de crisis que ha acelerado la pandemia del COVID-19, el impacto en las organizaciones que brindan financiamiento y los gobiernos de los países donantes es cada vez más evidente. La reorientación de los recursos para hacer frente a la pandemia ha ocasionado que las perspectivas financieras para las OSC del Sur Global no sean prometedoras. Si bien la mayoría de las fundaciones y agencias de cooperación han dado un paso adelante para apoyar a sus beneficiarios y socios en el corto plazo, es probable que la disponibilidad general de fondos se reduzca en el mediano plazo. Esto hace que las OSC se ubiquen en una posición de mayor vulnerabilidad a la que se encontraban en el pasado, especialmente si se combinan con medidas estatales represivas y limitantes operativas.

Esta serie de policy briefs sobre reducción de espacios cívicos ha apelado a profesionales a lo largo y ancho toda la región, incluyendo miembros de organizaciones que trabajan en diferentes campos, como derechos humanos, migración, prevención de conflictos, atrocidades masivas y Responsabilidad de Proteger, con el objetivo que aporten a la discusión su propia experiencia y un análisis sobre la situación de la reducción de espacios cívicos en cada uno de sus países. En segundo lugar, el objetivo de estos documentos no es sólo presentar un panorama estructural sobre cómo ha involucionado la situación de los espacios cívicos, sino con el objetivo de resaltar el factor humano de las crisis, y cómo “a pesar de”, las OSC siguen trabajando en la protección de esos espacios y colaborando con las personas directamente afectadas por la violencia, la emergencia humanitaria y las vulnerabilidades que la pandemia ha hecho ineludibles. Finalmente, desde los miembros del Foro Cúcuta, seguimos apoyando el desarrollo de estrategias regionales para poder profundizar el abordaje de la situación actual y generar discusiones epistémicas y respuestas pragmáticas que permitan generar recomendaciones en el futuro inmediato a nivel regional.

Para finalizar, queremos compartir algunas recomendaciones y lecciones aprendidas de nuestro trabajo con el Foro de Cúcuta y en el diseño de Estrategias para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas en América Latina y el Caribe.

En primer lugar: Incluir dentro de los foros de sociedad civil a diferentes organizaciones que trabajan en diferentes campos como derechos humanos, migración, prevención de conflictos y atrocidades masivas, Responsabilidad de Proteger y otros, actores gubernamentales e instituciones académicas para que aporten a la discusión su propia experiencia.

En segundo lugar: promover el trabajo coordinado e intercambio de información entre organizaciones que trabajan directamente en el terreno y organizaciones cuyo abordaje es de carácter académico, esto permite retroalimentar los enfoques y generar proyectos y programas integrales ocupando espacios cívicos vacantes.

En tercer lugar: Desarrollar capacidades y relaciones de confianza para intercambiar información y monitorear desarrollos transversales relevantes para mantener la paz integral a nivel regional co-creando nuevos procesos y foros de intercambio regular y de colaboración estratégica.

Finalmente: Apoyar el desarrollo de estrategias regionales para poder profundizar el abordaje de escenarios actuales o futuros generar discusiones epistémicas que permitan generar nuevos debates y apertura de ventanas de oportunidad.

REFERENCIAS

ACNUR (10 de noviembre 2020). R4V Response for venezuelan actualización. Disponible en: <https://data2.unhcr.org/en/situations/platform>. L

CIVICUS (2020). Monitor Tracking Civic Space. World Map. <https://monitor.civicus.org/country/>

Human Rights Watch (2020). Venezuela: A Police State Lashes Out Amid Covid-19. <https://www.hrw.org/news/2020/08/28/venezuela-police-state-lashes-out-amid-covid-19>